



INFORMACIONES

Herausgeber/Editor:

Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V.
Asociación Hispano-Alemana de Juristas

www.dsjv-ahaj.com

Editorial	98
Amanda Cohen Benchetrit	
Responsabilidad de los directores por incumplimiento de sus deberes en el marco de la gobernanza corporativa	100
Prof. Dr. Guillermo Palao Moreno	
Medidas cautelares y provisionales: Aspectos internacionales	106
Prof. Dr. Urs Gruber	
Einstweiliger Zivilrechtsschutz in Deutschland und Spanien	108
Alejandro Fuentes-Lojo Rius	
Novedades legales en arrendamientos de viviendas turísticas y de temporada	114
Pablo Giménez Moreno	
EuGH: Haustiere gelten als „Gepäck“ im Sinne des Montrealer Übereinkommens	115
Pablo Giménez Moreno	
TJUE: Los animales de compañía se consideran “equipaje” en el sentido del Convenio de Montreal	117
Konstantin Tschöpe	
Organhaftung für ESG-Compliance – Wann haften Vorstände für die Verletzung von ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitspflichten?	119
Alba Ródenas-Borràs, Elisenda Gramunt Puig	
Implicaciones del Brexit en la Cooperación Judicial Civil y Mercantil: El Papel de los Convenios de La Haya de 2005 y 2019	125
Alba Ródenas-Borràs, Elisenda Gramunt Puig	
Auswirkungen des Brexit auf die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen: Die Rolle der Haager Übereinkommen von 2005 und 2019	127
Frank Müller	
Steuerrecht 2025 (Teil 3)	129
Frank Müller	
Betriebsübergang Spanien	145
Rubén García-Quismondo, Julius Letzel, Laura Salamanca, Leandro Tavares, Markus Wittber	
Jornada Anual 2025 en Colonia	149
Prof. Dr. Madeleine Bernhardt, LL.M	
Buchankündigung	153
Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación	154
Veranstaltungen / Eventos	156
Mercado de trabajo / Praktikantenstellen	157
Willkommen / Bienvenidos	162
Impressum / Pie de imprenta	164

Alba Ródenas - Borràs, Elisenda Gramunt Puig

Implicaciones del Brexit en la Cooperación Judicial Civil y Mercantil: El Papel de los Convenios de La Haya de 2005 y 2019

1. Introducción

La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha supuesto una transformación sustancial en el régimen aplicable a los conflictos transfronterizos y las relaciones en el marco del derecho privado internacional en materia civil y mercantil. En particular, la desvinculación del Reino Unido del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis) ha generado importantes desafíos en cuanto a la cooperación judicial internacional y al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales.

Para paliar con este impedimento, el Reino Unido trató de incorporarse, sin éxito, al Convenio de Lugano. Tras ese intento fallido, el Reino Unido ha optado por adherirse a dos instrumentos multilaterales fundamentales: el Convenio de La Haya de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro y el Convenio de La Haya de 2019 sobre Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales Extranjeras en Materia Civil o Comercial.

2. El Convenio de La Haya de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro

El Reino Unido ratificó el Convenio de La Haya de 2005 el 28 de septiembre de 2020, con entrada en vigor el 1 de enero de 2021. Este instrumento internacional tiene como finalidad asegurar la eficacia de los acuerdos de elección de foro exclusivos celebrados entre partes en contratos internacionales, reforzando la seguridad jurídica y el respeto de la autonomía de la voluntad de las partes involucradas.

El Convenio impone a los Estados contratantes la obligación de:

- Respetar la elección de foro realizada por las partes;
- Reconocer y ejecutar las resoluciones dictadas por el tribunal elegido, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La Unión Europea es parte del Convenio desde el 1 de octubre de 2015. La adhesión del Reino Unido tras el Brexit permite mantener un marco supranacional para el reconocimiento de acuerdos de elección de foro, contribuyendo así a la continuidad jurídica en la resolución de controversias internacionales.

3. El Convenio de La Haya de 2019 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias

El Convenio de La Haya de 2 de julio de 2019 establece un régimen uniforme para el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil. Su objetivo principal es facilitar el acceso a la justicia transfronteriza, reduciendo costes, tanto a nivel económico como de ahorro de tiempo, aportando mayor seguridad jurídica a las relaciones internacionales.

El Reino Unido firmó este Convenio el 12 de enero de 2024, entrando en vigor el pasado 1 de julio de 2025. En el caso de la Unión Europea, el instrumento es aplicable desde el 1 de septiembre de 2023. Por lo tanto, el Convenio de 2019 será aplicable a las resoluciones dictadas en procedimientos iniciados a partir del 1 de julio de 2025.

El Convenio persigue diferentes finalidades en cuanto a reconocimiento y ejecución de sentencias:

- El establecimiento de requisitos mínimos para el reconocimiento y ejecución de sentencias (arts. 5 y 6);
- La enumeración de motivos específicos de denegación (art. 7);
- La exclusión de ciertas materias como el estado civil, capacidad jurídica, sucesiones, transporte de mercancías y pasajeros, así como validez, nulidad y disolución de personas jurídicas y asociaciones, entre otras. Además, también excluye la aplicación al arbitraje y los procedimientos relacionados con el mismo.

El Convenio promueve la eficacia práctica de las resoluciones judiciales al evitar la duplicidad de procedimientos y facilita su circulación transfronteriza sin impedir el reconocimiento fundado en normas internas o en otros tratados internacionales.

4. Interrelación entre los Convenios de La Haya de 2005 y 2019

Ambos convenios son complementarios y conforman un marco coherente para la resolución de controversias internacionales en el ámbito civil y mercantil. El Convenio de 2005 se centra en el respeto a los acuerdos de elección de foro, mientras que el de 2019 proporciona una vía para el reconocimiento de sentencias en ausencia de tales acuerdos.

De esta manera, el Convenio de 2019 amplía la cobertura del sistema, garantizando el acceso a la justicia y reduciendo los riesgos y costes inherentes a los litigios transnacionales.

No obstante, ninguno de los dos convenios elimina la necesidad de iniciar el procedimiento de *exequátur*, el cual sigue siendo necesario para obtener el reconocimiento y ejecución de una resolución extranjera. Conforme al artículo 13 del Convenio de 2019, dicho procedimiento se regirá por el Derecho procesal del Estado requerido.

Ambos instrumentos también permiten el reconocimiento parcial de sentencias, así como la ejecución de transacciones judiciales.

5. Régimen transitorio y normativa interna española

Conviene recordar que el Reglamento Bruselas I bis continúa siendo aplicable a aquellas resoluciones dictadas antes del 1 de enero de 2021, en virtud del régimen transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea.

En los casos en que no resulten aplicables ni el Reglamento Bruselas I bis, ni los Convenios de La Haya de 2005 o 2019, o cuando la legislación nacional resulte más favorable (art. 15 del Convenio de 2019), se acudirá a la normativa interna del Estado requerido.

En España, el marco legal aplicable es la **Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJI)**, que regula el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras mediante el procedimiento de *exequátur*. Aunque esta normativa interna contempla causas de denegación más estrictas que el Convenio

de 2019, la práctica judicial española ha demostrado ser, por lo general, favorable al reconocimiento de sentencias extranjeras.

En el Reino Unido, la norma aplicable es *The Recognition and Enforcement of Judgments (2019 Hague Convention) Regulations 2024* (SI 2024 No. 713).

6. Conclusión

La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha obligado a redefinir el marco jurídico para la cooperación judicial en materia civil y mercantil. En este contexto, la adhesión del Reino Unido a los Convenios de La Haya de 2005 y 2019 constituye una respuesta que busca garantizar la continuidad y la seguridad jurídica en las relaciones internacionales.

Ambos instrumentos forman un sistema armonizado que promueve la eficacia de las resoluciones judiciales y el respeto de la autonomía de las partes, sin sustituir completamente el papel de los ordenamientos nacionales. La convivencia de estos convenios con el Derecho interno implicará seguir dependiendo del procedimiento de *exequátur*, que se regirá por la LCJI cuando se tenga que celebrar en España.



Alba Ródenas-Borràs

Abogada LL.M. Prof. de Derecho Internacional Privado UB,
Augusta Abogados, Barcelona
a.rodenas@augustaabogados.com



Elisenda Gramunt Puig

Abogada , Augusta Abogados, Barcelona
e.gramunt@augustaabogados.com

Alba Ródenas - Borràs, Elisenda Gramunt Puig

Auswirkungen des Brexit auf die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen: Die Rolle der Haager Übereinkommen von 2005 und 2019

1. Einleitung

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hat zu einer grundlegenden Änderung der Regelung geführt, die auf grenzüberschreitende Streitigkeiten und Beziehungen im Rahmen des internationalen Privatrechts in Zivil- und Handelssachen anwendbar ist. Insbesondere die Entkopplung des Vereinigten Königreichs von der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 (Brüssel-Ia-Verordnung) hat erhebliche Herausforderungen in Bezug auf die internationale justizielle Zusammenarbeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen mit sich gebracht.

Um dieses Hindernis zu beseitigen, versuchte das Vereinigte Königreich erfolglos, dem Übereinkommen von Lugano beizutreten. Nach diesem gescheiterten Versuch hat sich das Vereinigte Königreich dafür entschieden, zwei wichtigen multilateralen Instrumenten beizutreten: dem Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen von 2005 und dem Haager Übereinkommen von 2019 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivil- oder Handelssachen.

2. Das Haager Übereinkommen von 2005 über Gerichtsstandsvereinbarungen

Das Vereinigte Königreich hat das Haager Übereinkommen von 2005 am 28. September 2020 ratifiziert und ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Ziel dieses internationalen Instruments ist es, die Wirksamkeit der zwischen den Parteien internationaler Verträge geschlossenen ausschließlichen Gerichtsstandsvereinbarungen zu gewährleisten und die Rechtssicherheit und die Achtung der Willensautonomie der beteiligten Parteien zu stärken.

Das Übereinkommen verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, die von den Vertragsparteien vereinbarte Wahl des zuständigen Gerichts zu achten. Außerdem müssen sie die vom gewählten Gericht erlassenen Entscheidungen anerkennen und vollstrecken, sofern die im Übereinkommen festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Europäische Union ist seit dem 1. Oktober 2015 Vertragspartei des Übereinkommens. Der Beitritt des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit ermöglicht die Beibehaltung eines supranationalen Rahmens für die Anerkennung von Gerichtsstandsvereinbarungen und trägt damit zur rechtlichen Kontinuität bei der Beilegung internationaler Streitigkeiten bei.

3. Das Haager Übereinkommen von 2019 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen

Mit dem Haager Übereinkommen vom 2. Juli 2019 wird eine einheitliche Regelung für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen geschaffen. Ihr Hauptziel besteht darin, den Zugang zum grenzüberschreitenden Recht zu erleichtern, die Kosten sowohl wirtschaftlich als auch zeitlich zu senken und die Rechtssicherheit in den internationalen Beziehungen zu erhöhen.

Das Vereinigte Königreich hat dieses Übereinkommen am 12. Januar 2024 unterzeichnet und tritt am 1. Juli 2025 in Kraft. Im Falle der Europäischen Union ist das Instrument ab dem 1. September 2023 anwendbar. Daher wird das Übereinkommen von 2019 auf Entscheidungen anwendbar sein, die in Verfahren ergehen, die am oder nach dem 1. Juli 2025 eingeleitet wurden.

Das Übereinkommen verfolgt unterschiedliche Zwecke in Bezug auf die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen:

- Festlegung von Mindestvorschriften für die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen (Art. 5 und 6);
- die Liste der spezifischen Eintragungshindernisse (Art. 7);
- Der Ausschluss bestimmter Angelegenheiten wie Familienstand, Rechtsfähigkeit, Erbschaft, Transport von Gütern und Personen sowie Gültigkeit, Nichtigkeit und Auflösung von juristischen Personen und Vereinigungen, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus schließt sie auch die Anwendung in einem Schiedsverfahren und damit zusammenhängende Verfahren aus.

Das Übereinkommen fördert die praktische Wirksamkeit gerichtlicher Entscheidungen, indem es Doppelverfahren vermeidet und ihren grenzüberschreitenden Verkehr erleichtert, ohne die Anerkennung auf der Grundlage innerstaatlicher Vorschriften oder anderer internationaler Verträge zu behindern.

4. Wechselbeziehung zwischen den Haager Übereinkommen von 2005 und 2019

Beide Abkommen ergänzen sich und bilden einen kohärenten Rahmen für die Beilegung internationaler Streitigkeiten im Zivil- und Handelsbereich. Das Übereinkommen von 2005 konzentriert sich auf die Einhaltung von Gerichtsstandsvereinbarungen, während das Übereinkommen von 2019 einen Weg für die Anerkennung von Entscheidungen bietet, wenn solche Vereinbarungen nicht getroffen wurden.

Auf diese Weise erweitert das Übereinkommen von 2019 den Geltungsbereich des Systems, garantiert den Zugang zum Recht und verringert die Risiken und Kosten, die mit grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten verbunden sind.

Keines der beiden Übereinkommen beseitigt jedoch die Notwendigkeit, das *Exequaturverfahren einzuleiten*, das nach wie vor erforderlich ist, um die Anerkennung und Vollstreckung einer ausländischen Entscheidung zu erwirken. Nach Art. 13 des Übereinkommens von 2019 unterliegt ein solches Verfahren dem Verfahrensrecht des ersuchten Staates.

Beide Instrumente ermöglichen auch die teilweise Anerkennung von Urteilen sowie die Vollstreckung gerichtlicher Vergleiche.

5. Übergangsregelung und innerstaatliches spanisches Recht

Es sei daran erinnert, dass die Brüssel-Ia-Verordnung im Rahmen der im Austrittsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der

Europäischen Union vorgesehenen Übergangsregelung weiterhin für Beschlüsse gilt, die vor dem 1. Januar 2021 erlassen wurden.

In Fällen, in denen weder die Brüsseler Verordnungen noch die Haager Übereinkommen von 2005 oder 2019 anwendbar sind oder in denen die nationalen Rechtsvorschriften günstiger sind (Artikel 15 des Übereinkommens von 2019), werden die innerstaatlichen Rechtsvorschriften des ersuchten Staates herangezogen.

In Spanien ist der anwendbare Rechtsrahmen das **Gesetz 29/2015 vom 30. Juli über die internationale justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen (LCJI)**, das die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile im Rahmen des Exequaturverfahrens regelt. Obwohl diese innerstaatlichen Rechtsvorschriften strengere Eintragungshindernisse vorsehen als das Übereinkommen von 2019, hat sich die spanische Gerichtspraxis im Allgemeinen zugunsten der Anerkennung ausländischer Entscheidungen erwiesen.

Im Vereinigten Königreich ist der anwendbare Standard die *Recognition and Enforcement of Judgments (2019 Hague Convention) Regulations 2024 (SI 2024 Nr. 713)*.

6. Fazit

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hat eine Neudefinition des Rechtsrahmens für die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen erzwungen. In diesem Zusammenhang stellt der Beitritt des Vereinigten Königreichs zu den Haager Übereinkommen von 2005 und 2019 eine Reaktion dar, die darauf abzielt, Kontinuität und Rechtssicherheit in den internationalen Beziehungen zu gewährleisten.

Beide Instrumente bilden ein harmonisiertes System, das die Wirksamkeit gerichtlicher Entscheidungen und die Achtung der Autonomie der Parteien fördert, ohne die Rolle des nationalen Rechts vollständig zu ersetzen. Die Koexistenz dieser Abkommen mit innerstaatlichem Recht wird bedeuten, dass sie weiterhin *vom Exequaturverfahren abhängig sein* werden, das dem LCJI unterliegt, wenn es in Spanien geschlossen werden muss.



Alba Ródenas-Borràs

Abogada LL.M. Prof. de Derecho Internacional Privado UB,
Augusta Abogados, Barcelona
a.rodenas@augustaabogados.com



Elisenda Gramunt Puig

Abogada
Augusta Abogados, Barcelona
e.gramunt@augustaabogados.com

INF

Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr
Revista jurídica hispano-alemana



INFORMACIONES